

## *El Plan Colombia y la estabilidad democrática en Colombia*

**Jennifer S. Holmes (Traducido por Percy Galimberti)**

Assistant professor of government & politics and political economy  
School of Social Sciences GR31  
University of Texas at Dallas

### INTRODUCCIÓN

¿Cuáles son los efectos del *Plan Colombia* y de la guerra contra las drogas en la estabilidad democrática en Colombia? ¿Irán el *Plan Colombia* a exacerbar o aliviar la situación? Las respuestas son complicadas por los cuatro tipos de violencia presentes: la violencia del Estado, la violencia de la guerrilla, la violencia paramilitar y la que está relacionada con las drogas. Para examinar las consecuencias de la violencia en Colombia y la posibilidad de efectividad del *Plan Colombia*, en esta discusión, será usado un concepto innovador de apoyo ciudadano, derivado de una visión aristotélica.

### EL ENFOQUE ARISTOTÉLICO

Ciertos conceptos y categorías aristotélicas son útiles para examinar la inestabilidad y pueden ser aplicados al estudio de la violencia.<sup>1</sup> Son útiles, pues los conceptos existentes de legitimidad no nos proporcionan un marco para analizar qué es lo que los ciudadanos esperan del gobierno (o qué es lo que el gobierno debería hacer). La mayoría de los estudiosos trabaja dentro del marco general delineado por Max Weber. El Estado es definido como proceso o como medio, en vez de fines o propósitos. Max Weber formuló una definición general de Estado, que continua influenciando a estudiosos contemporáneos.

Según Weber, existen tres formas básicas de legitimar la dominación: la tradicional, que puede incluir hábitos y “reconocimiento antiguo”; el carisma, y la forma basada en sentimientos de legalidad, que incluye “belief in the validity of legal statute and functional ‘competence’ based on rationally created rules.”<sup>2</sup> Hoy en día, los tres principales conceptos de legiti-

dad: socialización, procesal y evaluativo, se encajan dentro de los límites delineados por Weber.

El concepto de legitimidad supone un Estado sin fines o metas. Los conceptos basados en socialización permiten un análisis que involucra la evaluación del Estado por parte de los ciudadanos. Los conceptos basados en la eficiencia no dicen qué funciones deberían ser esperadas del Estado. El concepto de legitimidad carece de patrones de evaluación, necesarios para entender las consecuencias de la violencia. La evaluación se convierte en un principio fundamental de apoyo a la democracia, cuando la historia proporciona otras opciones de tipos de régimen, y cuando la legitimidad basada en los hábitos no es fuerte. El concepto de propósitos del Estado provee un concepto basado en propósitos o fines, que es fundamental para entender las consecuencias de la violencia terrorista y también la del Estado. Entender a la opinión pública dentro del contexto de la comunidad política y usar los propósitos del Estado como guías, permite una mayor comprensión de la violencia y sus consecuencias.

### LOS PROPÓSITOS DEL ESTADO

En vez de legitimidad, este análisis invoca la noción de los propósitos del Estado. Los efectos de la violencia pueden ser entendidos según los presupuestos de Aristóteles sobre qué es lo que la polis o el Estado deberían hacer. ¿Qué significa esto para un análisis contemporáneo? En vez de utilizar el concepto de legitimidad, el análisis se basa en una noción de dos niveles de propósitos del Estado.

En el primer nivel, algunas condiciones rudimentarias deben ser garantizadas antes de que sean siquiera propuestos los propósitos finales. Stephen Salkever dice: «before it is

possible to live well, it is necessary for us to live and to live together.»<sup>3</sup> Para alcanzar esto, integración y estabilidad son necesarios. "Survival and internal tranquility ...are only necessary conditions of virtue, but they are very necessary."<sup>4</sup> El primer nivel de propósitos incluye el cumplimiento de metas próximas, de seguridad e integración. Como Leo Strauss dice "the most urgent and primary task is self-preservation."

El segundo nivel exige conseguir la meta de desarrollar florecientes y virtuosos ciudadanos, o auto-superación.<sup>5</sup> Para un seguidor de Aristóteles, el segundo nivel necesita ser alcanzado, o, por lo menos, buscado.<sup>6</sup> Pero Aristóteles entiende que alcanzar, aún apenas el primer nivel, es importante: «for perhaps there is some simple element of the good in just living, so long as the evils of existence do not preponderate too heavily» (*Pol.*, p. 111). En su énfasis en el segundo nivel, él no minimiza la importancia del primero.

Saber hasta qué punto el Estado está consiguiendo, o no, sus propósitos, provee una base para entender y evaluar, en vez de saber hasta qué punto el Estado ha conseguido legitimidad, como es corrientemente entendido en la mayoría de las ciencias sociales. Los dos niveles de propósitos del Estado nos ilustran respecto de cómo los diferentes tipos de violencia ponen en peligro la seguridad y la integración de la comunidad política. La destrucción del primer nivel hace imposible progresar hacia un segundo nivel, y alcanzar un modo de vida satisfactorio.

## REPASO HISTÓRICO

Desde los años sesenta, Colombia hace frente a una insurgencia rebelde, que ha generado, como respuesta, muchos grupos paramilitares activos. Desde los años setenta, Colombia ha sufrido con la industria de drogas ilegales, que ha creado expansivas conexiones, y ha penetrado los partidos políticos, la sociedad y la economía. Los grupos guerrilleros, la violencia relacionada con las drogas y los paramilitares, han convertido a Colombia en uno de los países más peligrosos del mundo. Aproximadamente dos millones de colombianos han dejado el país, desde 1985. Este es un número significativo, en un país cuya población es menos de 42 millones de habitantes. Debido al conflicto rebelde y a la guerra de las drogas, centenas de bombas han explotado en ciudades colombianas; La Unión Patriótica, un partido de izquierda, formado por ex guerrilleros, tuvo más de 3.500 miembros muertos o desaparecidos por los paramilitares; cuatro candidatos presidenciales, la mitad de los jueces de la Corte Suprema, más de 1.200 policías, 200 periodistas y jueces, además de otros 300.000 colombianos han muerto violentamente desde 1985.<sup>7</sup> Los desafíos de la violencia, provenientes de los grupos de guerrilla, traficantes de drogas y paramilitares, son severos.

## CRISIS ECONÓMICA

Se calcula que el costo económico del conflicto con las guerrillas, entre 1990 y 1994, fue 4% del Producto Interno Bruto;<sup>8</sup> existen otros cálculos superiores, hasta del 9%. El conflicto, combinado con otros factores económicos, llevó a Colombia a tener el más alto nivel de desempleo en el hemisferio, en el año 2000. Para un país que evitó los problemas típicos de la "década perdida" de los años 1980, la crisis económica es grave.

	Tasa de crecimiento	Desempleo
1991	2,4	9,8
1992	3,8	9,2
1993	5,3	7,9
1994	5,3	7,6
1995	5,4	8,7
1996	2,0	11,9
1997	3,2	12,1
1998	0,6	15,7
1999	-4,8	19,5
2000	3,0	20,8

Fuente: DANE

Los últimos años de la década de 1990 fueron particularmente severos para Colombia. A pesar de que el crecimiento retornó el año 2000, el desempleo continuó creciendo.

## GRUPOS GUERRILLEROS DE COLOMBIA

En Colombia han estado activos cuatro principales grupos guerrilleros. El más grande y mejor equipado son las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP. Con un número de miembros entre 15.000 y 17.000, las FARC-EP quieren la revolución para establecer un Estado marxista-leninista. El grupo se financia por medio de la extorsión a empresas y a traficantes de drogas, en áreas bajo su control.<sup>9</sup>

El segundo grupo más grande era el Movimiento 19 de Abril-M-19. En noviembre de 1985, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y la Corte Suprema, en Bogotá. Después de un pequeño intento de negociación, los militares atacaron el edificio, matando a la mayoría de los líderes del M-19, y a la mitad de los magistrados. En 1989, los líderes sobrevivientes del M-19

firmaron un acuerdo con el gobierno Barco, para entregar sus armas a cambio de una reincorporación a la vida civil. Ahora, como un partido político legal, el M-19 se ha convertido en la Alianza Democrática-M-19.<sup>10</sup>

El tercer grupo es el Ejército Popular de Liberación-EPL. Este grupo, relativamente pequeño, pero altamente disciplinado, tiene de 300 a 500 miembros. El EPL ha criticado los vínculos entre las FARC-EP y las drogas. El EPL se financia por medio de secuestros y violencia contra la élite dueña de tierras.<sup>11</sup> Anteriormente, en el comienzo de la década de 1990, la mayoría del EPL hizo un acuerdo de paz con el gobierno, para terminar su rebelión, y los miembros restantes integran una facción que no acepta el acuerdo de paz.<sup>12</sup>

Finalmente, el Ejército de Liberación Nacional-ELN, es un grupo formado por cuatro a cinco mil guerrilleros, que alcanzó notoriedad al dinamitar los oleoductos que transportaban la mayor parte del petróleo colombiano para exportación, de las planicies orientales en dirección al Caribe.<sup>13</sup>

## TRAFICANTES DE DROGAS

Los traficantes de drogas en Colombia comenzaron con algunos cultivos de marihuana, en pequeña escala, en los años 60; en los años 70, algunos colombianos en el comercio de drogas comenzaron a procesar y exportar cocaína. Pasta de cocaína era importada de Perú y Bolivia, y los químicos necesarios eran traídos de Europa. El producto final era contrabandeadado para Estados Unidos. En 1982 el negocio había crecido de tal manera, que el comercio de drogas representaba entre 10 y 25% de las exportaciones del país. Al comienzo, el creciente comercio de las drogas no parecía ser una amenaza a la democracia colombiana.<sup>14</sup>

Cultivo de coca en Colombia (millares de hectáreas)				
1995	1996	1997	1998	1999
40.9	67.2	79.5	101.8	122.5

*Fuente:* República de Colombia "Plan Colombia and U.S. support for democracy, peace and economic prosperity in Colombia" junio de 2001.

En los años noventa, a pesar de los esfuerzos para erradicar la producción de coca, más y más tierras fueron cultivadas.

Al comienzo, algunos pocos grupos importantes controlaban el comercio de drogas en Colombia; uno de los principales era el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, y Jorge y Fabio Ochoa; este cartel estuvo en auge entre mediados y fines

de los años ochenta. Cuando Escobar murió, tras un tiroteo con la policía colombiana, el 2 de diciembre de 1993, el cartel de Cali asumió la mayoría de la producción. Menos violento que el cartel de Medellín, este grupo operó de forma diferente, al centrar su atención en legalizar parte de sus actividades e invertir en negocios legítimos. El presidente Ernesto Samper, recibió 6 millones de dólares de los negocios legales del cartel de Cali, durante su campaña presidencial. A pesar de esto, Samper puso en práctica una estrategia antidrogas, y los principales jefes del cartel fueron apresados en 1996, con sentencias relativamente suaves.<sup>15</sup>

Además de estos dos carteles, existen más organizaciones independientes que producen, refinan y contrabandean drogas, algunas de las cuales cooperan y coordinan sus acciones con los grupos más grandes.<sup>16</sup> Desde que los carteles de Cali y Medellín están siendo objetivos de las autoridades, otros grupos han ocupado el vacío, rápidamente, para responder a la demanda de drogas.

Las tentativas del presidente Samper, de combate a la producción de drogas, eran evidentes en 1996, un año en el cual se destruyó un gran número de laboratorios de cocaína y se intensificó la erradicación del opio. Este éxito, empero, tuvo vida corta: entre 1993 y 1999, los acres en potencial de plantación de coca, se cuadruplicaron.<sup>17</sup>

El negocio de las drogas es más complicado que cualquier otra actividad ilegal. Ha afectado, profundamente, los conflictos preexistentes. Antes de la emergencia del tráfico de drogas, había conflictos entre los dueños de tierras, tradicionales, y los grupos populares. Había luchas contra los latifundios no usados, demandas de campesinos por títulos de tierras, y desacuerdos causados por los programas de modernización rural apoyados por el gobierno. Hasta los años setenta, generalmente, los dueños de tierras ganaban esta batalla. El comercio de drogas cambió esto, al posibilitar la competencia entre los narcotraficantes y las élites tradicionales de dueños de tierras. En los años ochenta, la protección armada de las haciendas fue reforzada "so that in the middle of that decade almost all of the struggle for land had been eliminated through a combination of military harassment and paramilitary terrorism."<sup>18</sup> Los campesinos, que anteriormente demandaban tierras, las perdieron. La diseminación de la droga eliminó los "pesados" obstáculos, entre ellos jueces, policía, etc. El resultado fue el aumento de grupos criminales y el cambio en la dinámica del conflicto tradicional.

## RELACIÓN ENTRE TRAFICANTES DE DROGAS Y LA GUERRILLA

Los traficantes de drogas y las guerrillas tienen una relación compleja. Sangrientos conflictos entre narcotraficantes y

guerrilleros han sido comunes en áreas de cultivo y procesamiento de drogas; más aun, cuando los traficantes de drogas tomaron las tierras, crearon cuadrillas mortales para enfrentar a los guerrilleros, para aterrorizar a las poblaciones locales y anular la efectividad del gobierno. En pocas palabras, ellos reorganizaron a la sociedad, al eliminar la organización social anterior y crear su propia base social. En áreas donde los guerrilleros no pueden ser vencidos, se ha desarrollado una relación pragmática; en estos casos, productores y traficantes pagan tributo a los grupos guerrilleros.<sup>19</sup>

Algunos aseguran que los grupos guerrilleros conforman otro cartel de drogas; por ejemplo, el general Barry McCaffrey, director de la Office of National Drug Control Policy, ha llamado a las FARC-EP, "principle organizing entity of cocaine production in the world."<sup>20</sup> Según Marc Chernick, director del Andean and Amazonian Studies Program at Georgetown University:

Some have tried to obfuscate this issue by collapsing the two issues into one, saying that the guerrillas work with the drug traffickers and are therefore effectively 'narco-guerrillas.' However, this is a gross distortion of the situation in Colombia. The guerrillas do not constitute another 'cartel.' Their role in the drug trade is in extorting a percentage of the commercial transaction of coca and coca paste, just as they do with many other commercial products in the areas in which they operate, be it cattle, petroleum, or coffee.<sup>21</sup>

La relación entre guerrilleros y narcotraficantes es compleja, pero, la violencia de las drogas hace que el problema de las guerrillas sea más difícil de solucionar, y viceversa.

## LOS PARAMILITARES

El origen de los grupos de defensa civil, formados como respuesta a la guerrilla, se remonta a los años sesenta y setenta. El decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968 autorizaban a unidades de defensa civil para apoyar a las fuerzas armadas en los esfuerzos contrainsurgentes. Las actividades de estos grupos aumentaron bastante después de 1980, pero, como la violencia aumentó y la corrupción invadió estos grupos, se les declaró ilegales en 1989. De manera general, los grupos paramilitares son apoyados por propietarios de tierras, traficantes de drogas y algunos sectores de las fuerzas armadas. Los paramilitares también se financian mediante el cobro de tasas del comercio de drogas.<sup>22</sup> Un tipo de grupo paramilitar, las unidades *Convivir*, fueron creadas en el departamento de Antioquia en el comienzo de los años ochenta, para evitar la aparición de grupos paramilitares fuera de la ley; sus miembros sólo estaban autorizados a portar pequeñas armas; más tarde, a mediados de los años noventa, también fueron declarados ilegales, pues muchos de ellos se armaron y actuaron sobrepa-

sando los límites permitidos por la ley.<sup>23</sup> Antes que disolverse muchos continuaron operando clandestinamente. El grupo paramilitar más grande son las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC. Liderado por Carlos Castaño, este grupo, constituido por cinco a once mil paramilitares activos, aproximadamente, es financiado por propietarios de tierras, empresarios y comerciantes de drogas.

## EL ESTADO

El Estado colombiano ha sido acusado de cometer violaciones a los derechos humanos y contribuir con la violencia, ésta es una preocupación de muchos líderes de gobiernos y ONG internacionales. Parte de la controversia incluye si las fuerzas armadas tienen vínculos con los grupos paramilitares, que han sido responsable de, aproximadamente, el 75% de todos los asesinatos políticos. En su *World Report 2000*, Human Rights Watch documentó los vínculos entre la cuarta brigada del ejército colombiano y grupos paramilitares de Carlos Castaño. Se reportó que los hombres de Castaño podrían haber cambiado cadáveres de civiles por armas de la cuarta brigada. El ejército vestía entonces los cuerpos con prendas de guerrilleros, y alegaría que habrían muerto en combate. El propio Departamento de Estado norteamericano en su *1999 Country Reports on Human Rights*, afirma que "security forces actively collaborated with members of paramilitary groups by passing them through roadblocks, sharing intelligence, and providing them with ammunition."<sup>24</sup> Muchos grupos afirman que el paquete de ayuda más reciente no fue suficiente para prevenir esos vínculos y procesar a los responsables de colaborar con los grupos paramilitares.

Las instituciones han sido investigadas para mejorar la situación. En noviembre de 1998, el procurador delegado para Derechos Humanos reveló que en los quince meses anteriores, hubo 50 destituciones y otras sanciones disciplinarias contra 126 militares y personal de la policía, por violaciones a los derechos humanos, y abrió 600 casos contra los miembros de las fuerzas de seguridad, dentro de la investigación de 1.338 casos de víctimas de torturas, masacres y desapariciones forzadas.<sup>25</sup> En 1999, cuatro generales fueron destituidos por el presidente Pastrana, por tener vínculos con los paramilitares; uno de ellos, inclusive, ha sido llevado a juicio. También en 1999, la infame brigada XX, estrechamente conectada con los paramilitares, fue disuelta. Con la ayuda de Estados Unidos, las unidades de inteligencia militar comenzaron a ser reorganizadas y modernizadas. En el 2000, el presidente Pastrana, por decreto, delegó la autoridad de destituir personal trasgresor, al comando de las fuerzas armadas. De-

bido a esta ley, 89 oficiales y otros 299 militares fueron destituidos. A pesar de eso, no se abrieron procesos contra ninguno de ellos. Como destaca *Amnistía Internacional*, muchos oficiales militares y miembros del sistema judicial, de alto rango, están involucrados en violaciones de derechos humanos, y permanecen en sus puestos de trabajo.<sup>26</sup> En julio de 2000 fue expedido el acto 589, el cual criminaliza, de manera formal, las desapariciones forzadas; ese mismo año, el Ministro del Interior inició programas para proteger periodistas y activistas de derechos humanos, como el *Programa para la protección de periodistas y personas de los medios de comunicaciones*; al mismo tiempo, fue presentado un proyecto de ley, para que las personas puedan ser puestas en "custodia preventiva", sin orden judicial.<sup>27</sup>

### **POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS CON RELACIÓN A COLOMBIA**

En 1989, la presencia militar americana y la ayuda a Colombia eran de menor importancia. Pero, después del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien encabezaba las encuestas, Estados Unidos respondió fortaleciendo las fuerzas armadas colombianas y dando inicio a la guerra contra las drogas. En un mismo día, el presidente Bush anunció el suministro de 65 millones de dólares en armas y repuestos del Departamento de Defensa, a Colombia. El congreso americano rápidamente aprobó una línea de crédito de 200 millones de dólares del U.S. Export-Import Bank, para las fuerzas armadas colombianas. Tres semanas más tarde, el presidente Bush anunció que 261 millones de dólares más serían dados en ayuda a las naciones andinas de Colombia, Perú y Bolivia. En 1992 comenzaron los esfuerzos para concentrarse más en el ataque a los traficantes de drogas y los carteles, directamente, poniendo el centro de interés en sus principales miembros, en lugar de la erradicación de plantaciones. Cuando Estados Unidos comenzó a dirigir más ayuda militar y policial para combatir a los traficantes de drogas, muchas personas se preocuparon por que Estados Unidos estaba siendo llevado a involucrarse en operaciones de contrainsurgencia, contra el duradero conflicto con los rebeldes colombianos. De hecho, el GAO auditó los gastos de la guerra de las drogas en Colombia en 1992 y 1993, dando lugar a la preocupación de que los fondos antinarcóticos estarían siendo ilegalmente usados para operaciones de contrainsurgencia.

Según el *State department's bureau for international narcotics and law enforcement affairs*, existen tres principales metas para la política de Estados Unidos contra las drogas, en Colombia. La primera meta es eliminar el cultivo de

drogas ilegales en Colombia, incluyendo plantas de amapola, hojas de coca y marihuana. La segunda meta es fortalecer la capacidad de Colombia para desbaratar y dismantelar a las principales organizaciones de tráfico de drogas, e impedir su resurgimiento. Finalmente, el objetivo es destruir las industrias de procesamiento de cocaína y heroína.<sup>28</sup>

### **ESFUERZOS COLOMBIANOS PARA CONTROLAR LOS PROBLEMAS DE LAS DROGAS Y DE LA GUERRILLA**

Las dos últimas décadas se han caracterizado por tentativas colombianas de encontrar soluciones, tanto políticas como militares. A pesar de eso, hasta la fecha, pocos de los esfuerzos han conseguido éxito duradero. El presidente Turbay (1978-1982) se apoyó en unidades militares y paramilitares para intentar controlar la violencia. El presidente Betancur (1982-1986) inició conversaciones de paz, que resultaron en la formación de un partido político legal, Unión Patriótica, por parte de las FARC-EP. Pero, grupos paramilitares mataron a más de seis mil miembros de la Unión Patriótica, y el cese al fuego fracasó. Tanto la violencia urbana, como la rural, aumentaron bajo la presidencia de Barco (1986-1990). El presidente Gaviria (1990-1994) intentó recomenzar las conversaciones de paz, con extensivas negociaciones en 1991-1992, pero éstas no dieron resultado.

La respuesta al comercio de las drogas también varió. Un tratado de extradición con Estados Unidos fue firmado por el presidente Turbay en 1979. Pero ninguna extradición fue solicitada hasta la administración del presidente Betancur. Estas extradiciones crearon ciclos de violencia de las drogas, seguidos por retaliaciones del Estado, y más violencia. Las sangrientas acciones de los traficantes de drogas finalmente empeoraron tanto, que el presidente Gaviria terminó con las extradiciones para Estados Unidos. En 1991, Gaviria intentó una política de sometimiento voluntario a la justicia, en la cual los traficantes podían dejar el crimen y legalizar su capital, si se declaraban culpables de algunas contravenciones, por lo cual recibirían sentencias suaves. La administración del presidente Samper (1994-1998) fue estorbada por acusaciones de haber recibido millones de dólares provenientes de las drogas, para su campaña electoral. A pesar de eso, durante su mandato, el congreso colombiano aprobó una ley de confiscación de capital y retomó la extradición de traficantes de drogas para Estados Unidos. Sin embargo, la relación de Colombia con Estados Unidos estuvo bastante tensa, porque las acusaciones de haber aceptado dinero de las drogas mancharon la campaña electoral.<sup>29</sup>

En 1998, el recién electo presidente Pastrana comenzó tentativas de resolver el problema de las drogas y el conflicto de las guerrillas; inició conversaciones de paz tanto con las FARC-EP, como con el ELN, por primera vez en ocho años. A ambos grupos les fueron ofrecidos refugios seguros, como precondition para las negociaciones. Las FARC-EP recibieron una porción de tierras en el centro de Colombia, aproximadamente 42.000 kilómetros cuadrados (cerca del tamaño de Suiza), y el ELN recibió 5.000 kilómetros cuadrados de tierras. Una agenda de doce puntos, llamada *Agenda común para el cambio* fue anunciada para las conversaciones de paz, con las FARC-EP. Entre los puntos incluidos para ser discutidos estaban un asiento político negociado, una reforma agraria interina, esfuerzos contra la corrupción y el tráfico de drogas, reforma política, la reestructuración del sistema legal y la aplicación de leyes internacionales sobre derechos humanos.<sup>30</sup> Sin embargo, estas aperturas no han producido una paz viable. En el año 2000, Pastrana anunció el plan de tres años denominado *Plan Colombia* para avanzar hacia la solución de los problemas de drogas y del conflicto con los rebeldes, en Colombia.

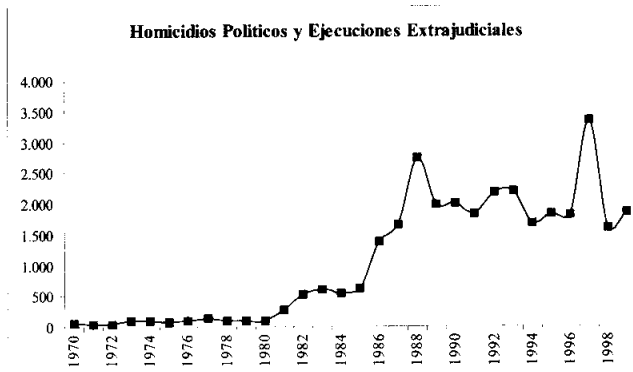
**LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN LOS PROPÓSITOS DEL ESTADO, EN LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS Y LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA**

Cualquier plan para combatir la polifacética violencia en Colombia, también necesita ocuparse de la poca confianza en el Estado. El concepto de los propósitos del Estado ayuda a identificar desafíos y constreñimientos que necesitan ser tratados en el proceso de conseguir la paz.

**PROPÓSITO DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO**

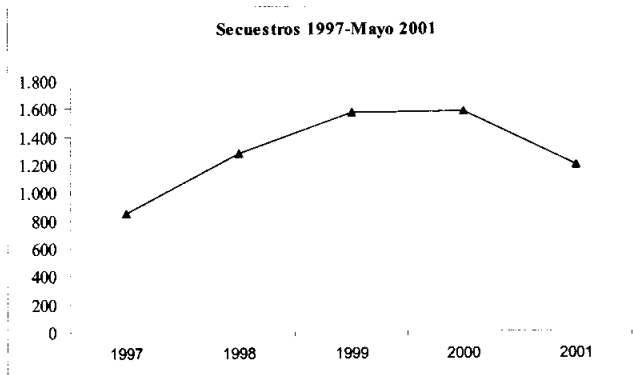
La seguridad de los colombianos está amenazada. La violencia de los narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, ha creado una situación en la que cada día el crimen se exagera. El conflicto ha afectado la capacidad de las autoridades para funcionar. Por ejemplo, el porcentaje de homicidios investigados, declinó del 80% en 1985, a menos del 30% en 1995. Un aumento en el número de homicidios, a la par con la violencia y la intimidación en contra del sistema judicial, contribuyen a reducir su efectividad.<sup>31</sup> Por ejemplo, Colombia tiene la tasa de homicidios más alta del mundo.

Las dos siguientes figuras demuestran la extensión de la violencia. Desde el final de los años ochenta, millares de personas fueron asesinadas, todos los años.



Fuentes: 1997 —hasta septiembre— CINEP; 1998-1999, Office of the People's Advocate; 1996 —sólo hasta septiembre—, 1.200 homicidios estimado para el año, 1800.

La Organización de Estados Americanos—OEA calcula un aumento de la violencia política. En 1988, un promedio de diez personas fueron asesinadas por día. De 1988 hasta septiembre de 1999, un promedio de 12 personas fueron asesinadas diariamente. De octubre de 1999 a marzo de 2000, el promedio aumentó a 14, y entre abril y septiembre de 2000, el promedio subió a 19 por día. El promedio diario de desapariciones también aumentó de 1 a 2. En 1999, 238 personas fueron confirmadas como desaparecidas. En el año 2000, ese número aumentó 664. Se estima que las fuerzas del Estado y los paramilitares son responsables por el 79.5% de las violaciones, y 20.5% las guerrillas.<sup>32</sup> Además de eso, millares de colombianos fueron secuestrados. Recientemente, cualquier persona con un millón de dólares en capital total, es considerada en riesgo de ser secuestrada. El secuestro es una de las principales fuentes de ingresos para los grupos guerrilleros.



Fuente: País Libre. Los datos para el año 2001 incluyen hasta mayo.

Según Gonzalo Sánchez, entre 1987 y 1998, ocurrieron 15.181 secuestros.<sup>33</sup>

gobiernos, organismos económicos públicos y privados, voceros de las organizaciones sociales y sectores de la llamada "sociedad civil", y otros grupos de interés, para comprender y manejar la complejidad del conflicto y su impacto en las relaciones entre países.

Comprender y valorar los alcances del *Plan Colombia* propuesto por el gobierno norteamericano, para quien: "Las debilidades de un Estado que todavía se encuentra involucrado en un proceso de consolidación han sido agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del narcotráfico... y, recientemente, la relación financiera entre los varios grupos armados y los narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto armado, y ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades más importantes."<sup>3</sup> Frente a lo cual propone un conjunto de estrategias económicas, fiscales y financieras, de paz, para la defensa nacional, judicial y de derechos humanos, de desarrollo alternativo, de participación social, de desarrollo humano y de orientación internacional, que nos exige confrontarlas a la luz de los desarrollos de la cultura política regional en tiempos de globalización, en los escenarios propios en las zonas de interacción fronteriza.

Abordar los asuntos de la seguridad, la soberanía y el control de recursos y dominios territoriales, es retomar el debate del problema nacional, aun no resuelto; por el contrario, a pesar de que las contiendas por la soberanía política, administrativa o económica han bajado de temperatura, sobre todo en su carácter antiimperialista, después de la crisis de Europa del Este están ganando cada vez más valor simbólico, en la perspectiva de una auténtica soberanía cultural, que sin desprestigiar los efectos de la lucha contra el poder político, ni los traumatismos o los progresos del modelo económico, constituyen una firme postura frente a la libre escogencia de su destino. La capacidad de una comunidad para establecer sus propios lenguajes internos y para escoger los elementos que representen mejor sus relaciones con el mundo exterior, reviste un carácter duradero, lo que equivale a decir que la soberanía cultural revela también la perspectiva histórica de las relaciones entre países.

Al respecto escribe el profesor James Petras: "El *Plan Colombia*, para ser entendido correctamente, debe ser considerado en una perspectiva histórica, tanto en el sentido colombiano como en relación con los recientes conflictos centro americanos. Es, simultáneamente, una política 'novedosa' y una continuación de la intervención pasada de Estados Unidos en Colombia." (157 y ss). *Plan LASO*, del presidente Kennedy.

Por otra parte, la internacionalización económica, que bien podría servir de explicación a los procesos de intervención directa de las potencias, allende sus fronteras, es conceptualmente divergente de la globalización de la cultura, que busca generar y

fortalecer identidades propias. Lo más visible es la influencia de ambos en los procesos de estructuración socioespacial. En cuanto ambos procesos están asociados a la acción política o la contingencia institucional. En similar sentido, escribe Edward Delgado: "En relación con las tradiciones políticas, estén o no reflejadas en las constituciones, debemos recordar la diferencia básica entre aquellas que dan a los entes locales una función tutelar y de inspección y aquellas que les otorgan una función activa en la dinámica ascendente que busca lograr un autogobierno del territorio" (30), para intentar encontrar en la lucha por la soberanía cultural una explicación plausible al escalamiento del conflicto interno colombiano.

Por esta razón vale la pena indagar por qué la otra cara del proceso globalizador se expresa en la integración de bloques industriales y comerciales que, en un nuevo movimiento concentrador y regionalizador de la economía se disputan no sólo el mercado mundial sino la hegemonía social. Se da, pues, un proceso de integración entre países de marcadas diferencias económicas y políticas que conduce a formas de regionalización económica en las que se condensa una fuerte hegemonía política de los países que, como Estados Unidos, la ex Unión Soviética, la Unión Europea, y Japón, después de la segunda guerra mundial, han asimilado para su beneficio los adelantos científicos y tecnológicos aparejados a la tercera revolución industrial. Estos, a su vez, a partir de tácticas y estrategias diferentes han incrementado su dominio político, económico y financiero sobre los países económica y políticamente menos poderosos.

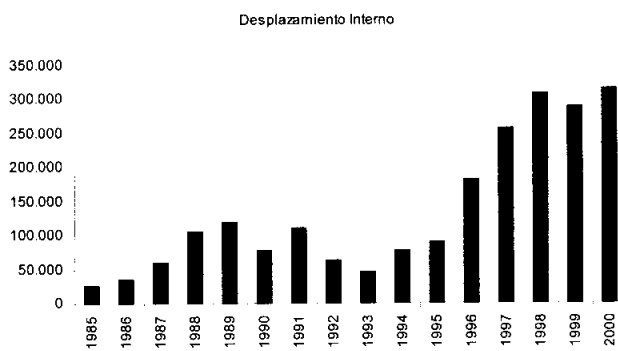
En este contexto de intensas disputas de los "Grandes" por el poder y la hegemonía sobre los recursos naturales de los diferentes países y de los mercados nacionales de los mismos, el análisis de los conflictos fronterizos adquiere una nueva dinámica. Los estudios sobre las fronteras o sobre la abrogación de las mismas, tan en boga actualmente, tienen que ser vistos dentro de un contexto social de intereses nacionales e internacionales contrapuestos, donde no sólo los gobiernos, como instituciones que representan el poder y la organización de los países a escala internacional, sino los diferentes sectores sociales tienen que ser involucrados. En esa perspectiva se inscribe el presente ensayo.

## CONTEXTOS HISTÓRICOS

Desde diversas ópticas y en un sangran número de estudios a cerca de la intervención norteamericana en los asuntos internos de los países de América Latina se ha venido planteando, que desde hace más de cien años, Estados Unidos ha estado ayudando significativamente a las fuerzas de seguri-

Mientras que la violencia de las guerrillas y la violencia paramilitar continúa creciendo, la violencia del Estado ha disminuido. Las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad colombianas ha disminuido, de más de 3.000 denuncias en 1996, a 586 en 1999. Aún más, el gobierno se ha puesto más agresivo al investigar y destituir militares involucrados en violaciones de los derechos humanos, o relacionados con grupos paramilitares.<sup>34</sup>

Una de las respuestas al riesgo de ser secuestrado es salir (mudarse). En los últimos quince años, 2.088.000 colombianos se han desplazado dentro del país.



Fuente: CODHES (Consultoría para el desplazamiento forzado y los derechos humanos) "Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada" y boletín 35 "Hasta Cuando"

CODHES calcula que los paramilitares fueron responsables por el 54% del desplazamiento forzoso, las guerrillas, 29% y los militares y la policía, 6%; 11% fueron desplazados por razones desconocidas. Otra opción es dejar el país. De hecho, muchos han dejado el país permanentemente, ocasionando un efecto de "fuga de cerebros".

Existen algunos datos de opinión pública respecto de la violencia. Infortunadamente, datos como series temporales no son disponibles. Sin embargo, un retrato de las actitudes de las convicciones públicas a respecto de la violencia, está disponible. A pesar de la proporción de la violencia, la mayoría de los colombianos rechaza el uso de ésta con fines políticos. Cuando fueron consultados, en 1997, si de modo vehemente eran contrarios o estaban a favor del siguiente enunciado: "Usar violencia para perseguir fines políticos nunca se justifica", el 67% estuvo de acuerdo y el 32% estuvo en contra.<sup>35</sup> Es digno de nota que la tercera parte pensó que la violencia podría ser justificada.

Los colombianos se dan cuenta de la extensión del tráfico de drogas en su país y de sus efectos nocivos. Cuando consultados: "de la lista de tópicos que voy a leerle, usted piensa

que ha aumentado mucho, poco, o ha disminuido", muchos colombianos perciben que el tráfico de drogas ha aumentado. ¿El tráfico de drogas ha aumentado o disminuido?

Aumentó mucho	
1996	28
1997	54
1998	43

Fuente: Latinobarómetro 1996-1998. Aquí, solamente "aumentó mucho"

Además de eso, 4 de cada 5 colombianos cree que el problema de las drogas es muy serio.

"Pensando en el problema de las drogas hoy, ¿usted diría que el problema es muy serio, no es tan serio, o no es serio, de ninguna manera?"

Muy serio	
1997	80
1998	82

Fuente: Latinobarómetro 1996-1998.

Claramente, los colombianos ven el problema de las drogas como algo serio y que aumenta en gravedad.

Este año que pasó, cuando se preguntó cuál era el principal problema enfrentado por Colombia, la complejidad de la situación era evidente. En una nación flagelada por la violencia y el más severo desempleo en América Latina, la delincuencia y el crimen son consecuencia del desempleo y de la corrupción.

Principales problemas que enfrenta la nación. 2000-enero 2001

Desempleo	33
Corrupción	30
Delincuencia y crimen	23
Educación	10

Fuente: Barómetro Iberoamericano Informe de opinión de Latinoamérica y de la península Ibérica enero 2001. Consorcio iberoamericano de empresas de investigación de mercados y asesoramiento



Al ser consultados sobre quién debe ser culpado por la violencia, la mayoría de los colombianos culpa a las guerrillas. En 1997, los colombianos fueron consultados al respecto, de la siguiente pregunta: “Me gustaría preguntarle acerca de algunos grupos que algunas personas sienten como amenaza al orden político y social en esta sociedad. ¿Podría usted, por favor, seleccionar un grupo u organización que le guste menos?”

Grupo que le gusta menos	%
Paramilitares	21
Guerrillas	52
Narcotraficantes	3
Homosexuales	1

Fuente: World Values Study, 1997.

Aunque uno de cada cinco colombianos culpa a los paramilitares, más de la mitad ve a los guerrilleros, como los mayores responsables de amenazar el orden. Otro estudio, conducido por Yankelovich, Acevedo y Asociados, en octubre de 1999, preguntó qué grupo es el mayor enemigo del bienestar de Colombia. El 39 por ciento escogió a las guerrillas, 9 por ciento, a los criminales comunes, y 8 por ciento a los paramilitares; el 23 por ciento escogió otros, 19 por ciento todos los anteriores y el 1 por ciento escogió a las fuerzas armadas.<sup>36</sup> Colombia enfrenta muchos problemas serios. Para controlar la violencia con éxito, estos otros problemas también tienen que ser tratados.

### PROPÓSITO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO

Cuarenta años de conflictos han repercutido en la integración de la comunidad política colombiana. La intolerancia es grande, y las elecciones han sido perjudicadas. Un ejemplo de intolerancia en relación al grupo que les gusta menos es grande (guerrillas, paramilitares, narcotraficantes u homosexuales).

¿“Piensa usted que el grupo identificado como el que le gusta menos debería poder...?”

	Sí	No
Tener cargos públicos	15	82
Enseñar	11	86
Mostrarse	13	84

Fuente: World Values Study, 1997.

Más del 80 por ciento de los entrevistados no desean que las personas del grupo que les gusta menos, enseñen, tengan cargos públicos o se muestren. Esto indica una grave polarización en la comunidad política. Una encuesta anterior, realizada por Yankelovich, en 1992, en Colombia, encontró que el 61 por ciento de los colombianos creían que las fuerzas armadas deberían “tomar la iniciativa y utilizar todos los métodos para combatir a las guerrillas.”<sup>37</sup> Entre los colombianos, parece que hay un gran apoyo por una posición inflexible contra los rebeldes.

Además de las actitudes que demuestran una falta de integración, puede notarse que el funcionamiento cotidiano de la democracia ha sido quebrado por la violencia. Según el Centro de información sobre desarrollo de la democracia en Colombia—CIDEDEC, antes de las elecciones regionales de 1997—que las guerrillas intentaron impedir— 200 candidatos fueron blanco de asesinatos cometidos por guerrilleros y paramilitares, 22 municipalidades no tenían candidatos, 359 candidatos a alcaldes se retiraron de la disputa electoral, 244 fueron secuestrados, y 110 candidatos fueron asesinados.<sup>38</sup>

### CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS

La opinión pública nos da una medida de cuán escasa es la confianza que la mayoría de los colombianos tiene en sus instituciones y en el gobierno. La intransigencia de los problemas del país se traduce en tasas de aprobación extremadamente bajas, de aquellos que están en el poder. Por ejemplo, cuando fueron consultados “¿De qué forma se sienten con la forma que las personas que están ahora a cargo de la conducción de la nación están tratando los asuntos del país? ¿Diría usted que está muy satisfecho, un poco satisfecho, un poco insatisfecho, o muy insatisfecho?” Solamente el 27 por ciento respondió “muy” o “un poco satisfecho”, mientras que el 70 por ciento respondió “muy” o “un poco insatisfechos”.<sup>39</sup> Las tentativas del presidente Pastrana, de negociar una solución política para el conflicto, no encontraron aprobación de muchos colombianos. Cuando fueron consultados, en el año 2000: “la manera como el presidente ha tratado la seguridad ha sido muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala,” solamente 19% respondió buena o muy buena.<sup>40</sup>

La extensión del problema es detallada por las siguientes afirmaciones sobre diferentes instituciones. Ante la pregunta, “voy a nombrar algunas organizaciones. Para cada una, ¿podría decirme cuánta confianza tiene usted en ellas: es muy grande, grande, no es mucha, o ninguna?”

Institución	Confianza	Falta de confianza
Iglesia	82	18
Fuerzas Armadas	60	38
Sistema Legal	47	51
Prensa	45	54
Policía	49	50
Gobierno Nacional	35	62
Partidos Políticos	17	81
Parlamento	24	73
Servicio Civil	37	66
Empresas	57	41

Fuente: World Values Study, 1997. Las respuestas de "estar con confianza" incluyen el porcentaje de respuestas válidas "muy grande" y "grande"; "falta de confianza" incluye: "no es mucha" y "ninguna".

Solamente la Iglesia Católica, las fuerzas armadas y las empresas gozan de la confianza de más de la mitad de los entrevistados. El sistema legal, la policía, el gobierno nacional, los partidos políticos, el parlamento y el servicio civil, sufren de grandes niveles de desconfianza, entre los colombianos.

### ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA

La estabilidad democrática de Colombia, en términos de apoyo ciudadano, parece fuerte. Pero, otras formas de gobierno también gozan de algún apoyo: "voy a describir varios tipos de sistemas políticos y preguntarle qué es lo que usted piensa de ellos, como una forma de gobernar este país. Para cada uno, ¿podría usted decir si es muy bueno, bueno, malo, o muy malo?"

	Aceptable	Inaceptable
Líder fuerte	51	44
Experto	68	28
Gobierno Militar	32	63

Fuente: World Values Study, 1997. Las respuestas de "aceptable" incluyen el porcentaje de respuestas válidas de "muy bueno" y "bueno". Las respuestas de "inaceptable" incluyen el porcentaje de respuestas válidas de "muy malo" y "malo".

De manera interesante, la única opción que fue vista como inaceptable por más de la mitad de los entrevistados fue el

gobierno militar. Pero, un líder fuerte, y un gobierno de expertos fueron vistos como aceptables por más de la mitad de los entrevistados. En una encuesta anterior, la democracia fue vista como preferible. Se preguntó a los entrevistados con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo: "Democracia es preferible a cualquier otro tipo de gobierno", o, "En ciertas situaciones, un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democrático", o, "Para que las personas gusten de mí, no importa si tenemos o no un gobierno democrático."

	Democracia es preferible	Gobierno autoritario	Es igual
1996	60	20	18
1997	69		
1998	55		

Fuente: Latinobarómetro 1996

La democracia es todavía preferida por la mayoría de los entrevistados. Pero, para la más antigua democracia de América Latina, el tamaño de la mayoría es modesto. A pesar de que la democracia es preferida, los colombianos, de manera general, no están satisfechos con la forma como ésta funciona. Cuando fueron consultados, "de manera general, ¿usted diría que está muy satisfecho, satisfecho, o insatisfecho con la forma como la democracia funciona en Colombia?" Solamente el 16 por ciento estaba satisfecho, en 1996. Con el nuevo presidente, en 1997, este número aumentó a 40 por ciento, todavía con falta de mayoría.<sup>41</sup>

### PERSPECTIVAS PARA EL PLAN COLOMBIA<sup>42</sup>

EL *Plan Colombia* del presidente Pastrana, iniciado en 1999, está destinado a combatir el tráfico de drogas y reducir su cultivo en un 50%; fortalecer las instituciones políticas y judiciales colombianas; patrocinar el desarrollo alternativo en las áreas de crecimiento de coca, y retomar la iniciativa en el conflicto con las guerrillas. El costo estimado de este programa es de siete mil quinientos millones de dólares. Colombia solicitó ayuda de la comunidad internacional, de la Unión Europea y Estados Unidos. Colombia, por su turno, ha destinado cuatro billones de dólares a ese esfuerzo.<sup>43</sup> Estados Unidos ha asignado 1.3 billones de dólares para el plan, mientras que la Unión Europea se ha resistido dar su parte de ayuda, debido a preocupaciones acerca de la naturaleza del plan.

## AYUDA DE ESTADOS UNIDOS

La mayor parte de la ayuda de Estados Unidos a Colombia, bajo el plan 2000-2001, va para la policía o para las fuerzas armadas. La idea es que fuerzas armadas más fuertes obligarán a los rebeldes financiados por las drogas, a negociar, seriamente, la paz. Un total de 589.2 millones de dólares es para ayudar a las fuerzas armadas, y 363.1 millones, para la policía. Los otros 238 millones de dólares del paquete de ayuda son distribuidos entre desarrollo alternativo, ayuda a los desplazados, derechos humanos, reforma judicial, cumplimiento de la ley y esfuerzos de paz. El paquete de ayuda final, de 1.319 billones de dólares contiene un aspecto vinculado con los derechos humanos, por el cual el gobierno de Colombia es obligado a cumplir seis condiciones, o recibir la renuncia o anulación de estas condiciones, para poder recibir la ayuda. Las condiciones son:

1. El presidente de Colombia debe dar una orden escrita, exigiendo que todos los militares con acusaciones verosímiles de violaciones de los derechos humanos sean juzgados en cortes civiles.
2. El comandante general de las fuerzas armadas colombianas debe, prontamente, suspender a aquellos que enfrentan acusaciones creíbles, de haber cometido violaciones de los derechos humanos o de participar en grupos paramilitares.
3. Las fuerza armadas colombianas deben cooperar plenamente con las investigaciones de las autoridades civiles, en los casos de aquellos acusados de violaciones de los derechos humanos.
4. El gobierno colombiano debe, de forma activa, procesar en cortes civiles a los líderes y miembros de grupos paramilitares, y a todo personal militar que lo ayude.
5. El gobierno colombiano debe crear un plan para suprimir toda la producción de coca y amapola, hasta el año 2005.
6. Se supone que las fuerza armadas colombianas deben desarrollar y difundir cortes marciales, en unidades de campo, para investigar desvíos de conducta del personal militar (Section 3201, PL 106-246).

Al final, Colombia cumplió apenas una de las exigencias, pero recibió la renuncia de la exigencia del cumplimiento de las condiciones, del presidente Clinton, que justificó su acción, enalteciendo la dedicación del presidente Pastrana hacia los derechos humanos y expresando su confianza en que el gobierno colombiano, eventualmente, cumplirá con todas las exigencias, al declarar: "I don't think anyone seriously believes that either the guerrillas or the narco-traffickers will be more careful with human rights than this president."<sup>44</sup>

Las críticas al paquete de ayuda de Estados Unidos han enfocado dos preocupaciones. Muchos estaban preocupados

en que la ayuda de Estados Unidos estuviera, en realidad, siendo usada para propósitos contra la insurgencia. Otros querían estar seguros que la ayuda de Estados Unidos no sería usada para beneficiar grupos implicados en violaciones de los derechos humanos. Algunos críticos han preguntado por qué el Plan Colombia enfoca sus acciones en la región Sur de Colombia, un tradicional reducto rebelde, en vez de las regiones del Norte, donde los paramilitares estaban activos en el comercio de drogas. Los críticos, pues, sospechaban que el propósito real de esta ayuda era dar una asistencia a Colombia, en su conflicto interno, además de reducir el comercio de drogas. Previamente, en 1994, *Amnistía Internacional* había acusado al Pentágono de permitir que la ayuda contra el tráfico de drogas fuera usada para combatir la insurgencia. Otros han criticado la ayuda de Estados Unidos, como algo que no propicia el proceso de paz.

El gobierno de Colombia es sensible a las críticas de que el paquete de ayuda de Estados Unidos es de naturaleza predominantemente militar. Pero, se nota que del total de gastos planeados por el Plan Colombia, la guerra contra las drogas, la reforma judicial y de seguridad, componen el 58% del paquete, el proceso de paz, 1%, las políticas económicas, 14% y la democratización y el desarrollo social, 27%.<sup>45</sup>

El presidente George W. Bush ha propuesto fondos adicionales bajo la Iniciativa Regional Andina. Sensible a las críticas de que el paquete anterior enfocaba demasiado la ayuda militar, el nuevo paquete es dividido casi de igual forma, entre el cumplimiento de las leyes, asistencia a la seguridad, desarrollos social y económico, y reforma institucional. El paquete total de 882 millones de dólares es dividido entre las naciones andinas, pero Colombia ha sido designada para recibir 45% del total de los fondos, o sea 399 millones. 253 millones de la ayuda a Colombia son para las fuerzas armadas o, para seguridad;<sup>46</sup> el resto, 146 millones, iría para desarrollar y reformar programas como el USAID, programas sobre la reforma de la justicia, mejoras de gobiernos locales, sustitución de cultivos y desarrollo alternativo.<sup>47</sup>

## RESPUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA

En mayo de 2001, la Unión Europea anunció planes de dar 330 millones de dólares a Colombia. A pesar de eso, representantes de la Unión Europea han sido constantes en denunciar el énfasis militar de la ayuda de Estados Unidos. De manera diferente, la ayuda de la Unión Europea enfoca el fortalecimiento de la democracia y la ayuda a agricultores, para que cambien al cultivo de plantaciones legales. Según el comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Chris Patten,

'We are supporting the peace process in Colombia. We are not supporting any military plans or activities whatsoever.' En vez de eso, la Unión Europea está interesada en un 'comprehensive and balanced approach', que podría incluir la erradicación manual de las plantaciones de coca, en contraposición al combate mediante *spray* aéreo de las plantaciones. Patton enfatizó que cualquier política antidrogas 'needs to be backed up by long term alternative income-generating plans...[y corresponder a] the social needs of the population.'<sup>48</sup> La Unión europea se opone al uso de pulverizaciones aéreas porque eso no da una solución de largo plazo para los agricultores en las áreas afectadas. Además de eso, el principal herbicida usado, glifosato, está prohibido en muchos Estados de los Estados Unidos, a causa de sus potenciales efectos al medio ambiente. En enero de 2001, una delegación de la *Alta Comisión para Refugiados*, de las Naciones Unidas, visitó un área de Colombia donde se había usado glifosato; ésta fue descrita como «desolada», con «indiscriminada destrucción de la jungla, de plantaciones legales, plantas medicinales y estanques de peces. Hay una clara evidencia de que la vida salvaje ha huido, los ríos están contaminados, y la producción en la región ha decaído.» Con relación a los humanos, muchos problemas de salud han sido reportados, y las pulverizaciones aéreas contribuyen para el desplazamiento interno en Colombia.<sup>49</sup>

## CONCLUSIÓN

Un plan efectivo tendrá que tratar no sólo de preocupaciones con la seguridad; también preocupaciones con la integración y la reforma de las instituciones, para reconquistar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. ¿El Plan Colombia pretende alcanzar todo esto? Para responder esta pregunta, tenemos que analizar dos problemas. Primero, el pesado enfoque militar del plan de ayuda de Estados Unidos irá, innegablemente, a intensificar el conflicto, llevando a accidentes y pérdidas humanas más grandes, y a una reducción de seguridad para los colombianos. La intensificación del conflicto también provocará más desplazamientos internos y no promoverá mayor integración y tolerancia dentro de la comunidad política. Aún más, el énfasis en la erradicación aérea corroe la estabilidad económica del país, exacerba el desplazamiento interno y crea resentimientos de los ciudadanos hacia el Estado, además de destruir su confianza en éste. Además de eso, la resistencia de Estados Unidos, de hacer cumplir los componentes relativos a los derechos humanos de su paquete de ayuda, no promueve, a su vez, el cumplimiento con el protocolo internacional de derechos humanos.

Una propuesta, en esa línea, podría funcionar para fortalecer la seguridad, la integración y la confianza de los ciudada-

nos. Aún más, como enfatiza la Unión Europea, apoyo para el proceso de paz debe llegar. Conforme lo visto en otros países, como España e Irlanda del Norte, la solución política para violentos conflictos con terroristas y rebeldes, toma tiempo, paciencia, y mucha habilidad política. Sin embargo, a la larga, es la única solución que no va corroe más los propósitos del Estado, y, al final, la propia democracia.

## BIBLIOGRAFÍA

- Adams, David y Paul de la Garza "EU Backs Colombian Peace" *St. Petersburg Times* mayo 3 de 2001.
- Amnesty International 1998. Annual Report Colombia
- Amnesty International 2001. Annual Report Colombia
- Aristóteles. *Politics*. Earnest Barrer trad. London: Oxford University Press, 1958.
- Bagley, Bruce "Drug Trafficking, Political Violence and U.S. Policy in Colombia in the 1990's" *Mama Coca*, 2001.
- Barómetro Iberoamericano, *Informe de Opinión de Latinoamérica y de la Península Ibérica* enero de 2001.
- Castillo, Fabio. *Los nuevos jinetes de la coca*. Bogotá: Oveja Negra, 1996.
- CIDEC "La democracia en peligro: los alcaldes como objetivo militar" agosto de 2000.
- Cubides, Fernando. "The Paramilitaries" *Violence in Colombia 1990-2000 Waging War and Negotiating Peace*. Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez (eds). SR Books: Wilmington Delaware, 2001.
- GAD (Support Group for Displaced People Organizations) "Report of Forced Displacement in Colombia 1999."
- Granada y Rojas "Violence in Colombia: Building a Sustainable Peace and Social Capital" Washington D.C: World Bank, 2000, tabla 2.
- Hartlyn, Jonathan. "Colombia: The Politics of Violence and Accommodation" *Democracy in Developing Countries* vol. 4. Juan Linz, Larry Diamond y Jonathan Hartlyn (eds). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993, 291-334.
- Holmes, Jennifer S., *Terrorism and Democratic Stability*. Manchester University Press, 2001.
- Latinobarómetro* 1996
- Marquis, Christopher. "New Drug Plan Shifts Focus in Latin America" *New York Times*, 17 de mayo de 2001.
- Organization of American States, "OAS Inter-American Human Rights Commission 2000 Report: Colombia."
- Padilla, Castro y Fredy Nelson. "Toxic Rain Kills More than the Coca." UNESCO Courier mayo de 2001.
- Pardo, Rafael. "Colombia's Two Front War," *Foreign Affairs*, julio/ agosto de 2000.

- Pomper, Miles. "Leaders Push Trade Aid for Colombia." *CQ Weekly* 2 de septiembre de 2000.
- República de Colombia "Plan Colombia and U.S. Support for Democracy, Peace and Economic Prosperity in Colombia" junio de 2001.
- Reyes, Alejandro. "Drug Trafficking and the Guerrilla Movement in Colombia" *Drug Trafficking in the Americas*. Bruce Bagley and William Walter (eds). Miami: North-South Center Press, 1995.
- Ruben, Mauricio. "La violencia en Colombia: dimesionamiento y políticas de control" *Serie de documentos de trabajo R-345*. Washington D.C: Interamerican development bank, octubre de 1998, pp. 42-49.
- Salkever, Stephen. "Aristotle's Social Science" *Political Theory* vol 9, No. 4, noviembre de 1981.
- Steiner, Roberto. "Hooked on Drugs: Colombian-US Relations." *The United States and Latin America: The New Agenda*. Victor Bulmer-Thomas y James Dunkerley (eds). London: Institute of Latin American Studies, University of London, 1999, 171.
- Strauss, Leo. *Natural Right and History*. Chicago: University of Chicago Press, 1965.
- Thoumi, Francisco "Why the Illegal Psychodelic Drug Use Industry Grew in Colombia" B.M. Bagley y W.O.Walker (eds). *Drug Trafficking in the Americas*. Coral Gables: North-South Center, University of Miami Press, 1995.
- U.S. Congress, House of Representatives, House of Representatives Committee on International Relations, *U.S. Narcotics Policy Toward Colombia* 104th Cong. 2d. sess., 47.
- U.S. Department of State, "On the Record Briefing: Andean Regional Initiative" 18 de mayo de 2001.
- United States Government, *International Narcotics Strategy Report*. 1999.
- Sánchez G., Gonzalo. "Problems of Violence, Prospects for Peace" *Violence in Colombia 1990-2000 Waging War and Negotiating Peace*. Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez (eds). SR Books: Wilmington Delaware, 2001.
- Semana*
- Washington Post*
- Weber, Max. "Politics as a Vocation." H.H.Gerth y C. Wright Mills (eds). *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press, 1946.
- World Values Study, 1997.
1. Algunos estudiosos de la filosofía de la ciencia han defendido un enfoque aristotélico en la política. Ver los escritos de Stephen Salkever, Martha Nussbaum, Leo Strauss, Bernard Yack, y Alasdair MacIntyre. Para una aplicación de este enfoque, en un estudio comparativo de la violencia, ver Jennifer S. Holmes, *Terrorism and Democratic Stability*. Manchester University Press, 2001. Todas las citas de *Politics*, son de la traducción de Earnest Barker, *Politics* London: Oxford university Press, 1958. Las siguientes abreviaciones serán usadas para denominar las obras de Aristóteles: Pol. = Política; NE = Ética a Nicómaco.
  2. Weber, "Politics as a Vocation" p. 79. "creer en la validez del estatuto legal y de la competencia funcional basada en reglas creadas racionalmente."
  3. Stephen Salkever, "Aristotle's Social Science" *Political Theory*. vol 9, No. 4, noviembre de 1981: 492.
  4. Salkever, 1981, p. 492.
  5. Leo Strauss, *Natural Right and History* Chicago: University of Chicago Press, 1965, p. 6.
  6. El componente de intentar alcanzar el beneficio es inseparable de un enfoque aristotélico. Sería inconsistente llamar aristotélico a un enfoque que niegue el componente de valores. Pero esto no quiere decir que el enfoque tiene que ser despreciado por aquellos que no concuerdan con la incorporación de aspectos empíricamente no verificables. La orientación del estudio es dirigida por la busca del bien —beneficio—, a pesar de que permanece un componente empírico, que todavía podría ser examinado, de acuerdo con aquellos que no concuerdan con el enfoque en general.
  7. Rafael Pardo, "Colombia's Two Front War," *Foreign Affairs*, July/ August 2000, 65.
  8. Granada y Rojas "Violence in Colombia: Building a Sustainable Peace and Social Capital" World Bank: Washington D.C, 2000, tabla 2.
  9. Jonathan Hartlyn, "Colombia: The Politics of Violence and Accommodation" *Democracy in Developing Countries*. vol 4. Juan Linz, Larry Diamond y Jonathan Hartlyn. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993, 291-334.
  10. Ibid.
  11. Ibid.
  12. Bruce Bagley, "Drug Trafficking, Political Violence and U.S. Policy in Colombia in the 1990's" *Mama Coca* 2001 [www.mamacoca.org/bagley\\_drugs\\_and\\_violence\\_en.htm](http://www.mamacoca.org/bagley_drugs_and_violence_en.htm).
  13. Ibid.
  14. Francisco Thoumi, "Why the Illegal Psychodelic Drug Use Industry Grew in Colombia " B.M. Bagley and W.O.Walker (eds). *Drug Trafficking in the Americas*. Coral Gables: North-South Center, University of Miami Press, 1995.
  15. Alejandro Reyes, "Drug Trafficking and the Guerrilla Movement in Colombia" *Drug Trafficking in the Americas*. Bruce Bagley y William Walker (eds). Miami: North-South Center Press, 1995.
  16. Fabio Castillo, *Los nuevos jinetes de la cocaína*. Bogotá: Oveja Negra, 1996.
  17. United States Government, *International Narcotics Strategy Report*, 1999.

18. Reyes, p. 125. "de tal manera que, en la mitad de aquella década, casi toda la lucha por tierras fue eliminada a través de una combinación de persecución militar y terrorismo paramilitar."
19. Ibid, p. 122. Ver también Roberto Steiner "Hooked on Drugs: Colombian-US Relations." *The United States and Latin America: The New Agenda*. Victor Bulmer-Thomas y James Dunkerley (eds). London: Institute of Latin American Studies, University of London, 1999, 171.
20. "U.S. Drug Chief Tries to Boost Colombian Resolve" *Washington Post* 21 de noviembre de 2000, A22.
21. House of Representatives Committee on International Relations *U.S. Narcotics Policy Toward Colombia* 104<sup>th</sup> Cong. 2d. sess., 47. "Algunos han intentado disfrazar este aspecto, juntando dos asuntos en uno, diciendo que las guerrillas funcionan junto con los traficantes de drogas, y, por lo tanto, son, efectivamente, 'narco-guerrillas'. Las guerrillas no constituyen otro cartel. Su papel en el comercio de drogas es exigir un porcentaje de la transacción comercial de coca y pasta de coca, apenas de la misma forma como lo hacen con muchos otros productos comerciales, en las áreas donde operan, ya sea ganado, petróleo o café."
22. Bruce Bagley, "Drug Trafficking, Political Violence and U.S. Policy in Colombia in the 1990's" *Mama Coca* 2001 [www.mamacoca.org/bagley\\_drugs\\_and\\_violence\\_en.htm](http://www.mamacoca.org/bagley_drugs_and_violence_en.htm).
23. Fernando Cubides, "The Paramilitaries" *Violence in Colombia 1990-2000 Waging War and Negotiating Peace*. Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez. SR Books: Wilmington Delaware, 2001.
24. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, 25 de febrero de 2000, disponible en línea: [www.state.gov/www/global/human\\_rights/1999\\_hrp\\_report/colombia.html](http://www.state.gov/www/global/human_rights/1999_hrp_report/colombia.html) "fuerzas de seguridad colaboraron activamente con miembros de grupos paramilitares dándoles paso a través de los bloqueos de carreteras, compartiendo inteligencia y proveyéndoles municiones."
25. *Annual Report Colombia* Amnesty International 1998.
26. *Annual Report Colombia* Amnesty International 2001.
27. Organization of American States, "OAS Inter-American Human Rights Commission 2000 Report: Colombia"
28. Fact Sheet dado por el *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs*, 23 de abril de 1999.
29. Para una visión profunda de las respuestas de la guerrilla y los conflictos de las drogas, véase Alejandro Reyes, "Drug Trafficking and the Guerrilla Movement in Colombia" *Drug Trafficking in the Americas*. Bruce Bagley and William Walker (eds). Miami: North-South Center Press, 1995; y Roberto Steiner "Hooked on Drugs: Colombian-US Relations." *The United States and Latin America: The New Agenda*. Victor Bulmer-Thomas y James Dunkerley (eds). London: Institute of Latin American Studies, University of London, 1999.
30. GAD (Support Group for Displaced People Organizations) "Report of Forced Displacement in Colombia 1999" [www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/gad1.html](http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/gad1.html)
31. Mauricio Ruben, "La violencia en Colombia: dimesionamiento y políticas de control" Serie de documentos de trabajo R 345, Interamerican development bank Washington D.C., October 1998, pp. 42-49
32. Organization of American States, "OAS Inter-American Human Rights Commission 2000 Report: Colombia"
33. Gonzalo Sánchez G. "Problems of Violence, Prospects for Peace" *Violence in Colombia 1990-2000 Waging War and Negotiating Peace*. Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez (eds). SR Books: Wilmington Delaware, 2001.
34. Republic of Colombia "Plan Colombia and U.S. Support for Democracy, Peace and Economic Prosperity in Colombia" junio de 2001.
35. World Values Study, 1997. Las respuestas de 'estar de acuerdo' incluyen el porcentaje de respuestas válidas 'totalmente de acuerdo', y 'de acuerdo'. Las respuestas de 'no estar de acuerdo' incluyen el porcentaje de respuestas válidas 'totalmente en desacuerdo' o 'no estoy de acuerdo'.
36. *La fuerza pública y los derechos humanos en Colombia* p. 29
37. "Guerra para rato" *Semana*. 2 de junio de 1992, pp. 30-35.
38. "La democracia en peligro: los alcaldes como objetivo militar." CIDEDEC, agosto de 2000.
39. World Values Study, 1997. Las respuestas de 'satisfecho' incluyen el porcentaje de respuestas válidas 'muy satisfecho' o 'satisfecho'. Las respuestas de 'inaceptable' incluyen el porcentaje de respuestas válidas 'muy insatisfecho' e 'insatisfecho'.
40. Barómetro Iberoamericano. *Informe de Opinión de Latinoamérica y de la Península Ibérica Enero 2001*. Consorcio iberoamericano de empresas de investigación de mercados y asesoramiento Dic. 2000- Ene. 2001
41. Latinobarómetro 1996
42. Para el presidente George W. Bush, se refiere al Plan Colombia como la 'contra-iniciativa Andina de las drogas'.
43. Una copia del *Plan Colombia* está disponible en línea: [http://www.usip.org/library/pa/colombia/adddoc/plan\\_colombia\\_101999.html](http://www.usip.org/library/pa/colombia/adddoc/plan_colombia_101999.html)
44. Miles Pomper, "Leaders Push Trade Aid for Colombia" *CQ Weekly*. 2 de septiembre de 2000, 2037. "Yo no pienso que alguien, seriamente, crea que tanto los guerrilleros, como los narcotraficantes tendrán más cuidados con los derechos humanos, que este presidente."
45. Republic of Colombia "Plan Colombia and U.S. Support for Democracy, Peace and Economic Prosperity in Colombia" junio de 2001.
46. U.S. Department of State, "On the Record Briefing: Andean Regional Initiative" 18 de mayo de 2001.
47. Christopher Marquis, "New Drug Plan Shifts Focus in Latin America" *New York Times* May 17, 2001.
48. David Adams y Paul de la Garza "EU Backs Colombian Peace." *St.Petersburg Times* 3 de mayo de 2001. "Nosotros estamos apoyando el proceso de paz en Colombia. Nosotros no estamos apoyando ningún plan o actividad militar" y "debe ser apoyado por proyectos de largo plazo ... [ y corresponder a ] las necesidades de la población."
49. Nelson Fredy Padilla Castro, "Toxic Rain Kills More than the Coca" *UNESCO Courier* mayode 2001, pp. 10-11.